



16 PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES  
SÓLIDAS



## ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas en América Latina y el Caribe<sup>1</sup>

### Estadísticas regionales clave sobre el ODS 16

- La tasa de homicidios es de 22,1 personas por cada 100.000 habitantes, la tasa de asaltos es de 229,5 por cada 100.000 habitantes y la tasa de violencia sexual es de 60,6 por cada 100.000 habitantes en la región.
- Un total de 2.559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 2017 en 19 países de la región.
- Un promedio del 29,8% de los representantes en los órganos legislativos en América Latina y el Caribe fueron mujeres, el porcentaje más alto a nivel mundial en mayo de 2018. El promedio de las tasas de participación femenina en los máximos tribunales de justicia de América Latina alcanzó un 29,2% en 2017.
- En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (20), el porcentaje de alcaldesas electas se sitúa por debajo del 15% y el promedio latinoamericano llega solo al 14,6% en 2017.
- De los jóvenes consultados en el Foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030 (celebrado en el marco de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible), el 65% considera que su derecho de acceso a la justicia se vio limitado por alguna situación, el 56% se considera víctima de impunidad en el sistema de justicia de su país, el 74% presenció actos de corrupción en su entorno cercano, el 95% considera que existe impunidad frente a actos de corrupción y el 100% considera que la corrupción es un problema latente que limita el desarrollo. Un 65% de los jóvenes consultados no considera que los actuales mecanismos de participación ciudadana sean inclusivos y representativos y el 81% no considera que los jóvenes estén representados en el proceso de toma de decisiones.
- 1 país ha ratificado y 16 países han firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
- En el Caribe, tanto las principales víctimas como los principales autores de delitos son jóvenes. El 80% de los delitos que son objeto de proceso son cometidos por personas de entre 17 y 29 años, mientras que muchas víctimas de delitos violentos pertenecen al mismo grupo de edad. Tanto las víctimas como los perpetradores tienen más probabilidades de pertenecer a grupos socioeconómicos más bajos.
- Entre los países del Caribe, ninguno cuenta con legislación que prohíba totalmente el castigo corporal de niños, niñas y adolescentes.

<sup>1</sup> El análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aquí se presenta es el resultado de los debates que tuvieron lugar en el marco de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, convocada bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago del 24 al 26 de abril de 2019.



Foro de los Países  
de América Latina  
y el Caribe sobre el  
**DESARROLLO  
SOSTENIBLE**  
Santiago  
24 a 26 de abril  
**2019**

## Mensajes clave de la región sobre los temas que aborda el ODS 16 y sus metas

- El Acuerdo de Escazú —primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe— es esencial para alcanzar la Agenda 2030 en su conjunto y particularmente el ODS 16 y sus metas, y es una herramienta fundamental para empoderar a las personas y asegurar la inclusión y la igualdad. El Acuerdo tiene un foco en personas que están en situación de vulnerabilidad y en los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, amenazados y asesinados por defender su territorio y el medio ambiente en América Latina y el Caribe, región catalogada como la más peligrosa en este tema.
- Existe un vínculo claro entre los compromisos globales sobre cambio climático —como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París— y el Acuerdo de Escazú.
- El acceso a la información pública y el gobierno abierto (y el Estado abierto) es clave para la transparencia, la democracia y la buena gobernanza, y un requisito para la participación significativa del público en la toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible.
- Los derechos de acceso otorgan legitimidad a la toma de decisiones y contribuyen a lograr paz y seguridad y a prevenir los conflictos.
- El estado de derecho es un catalizador del desarrollo sostenible, siendo el acceso a la justicia determinante para la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos humanos.
- El logro del ODS 16 depende de un enfoque de la sociedad en su conjunto. La sociedad civil incluye a defensores de personas y grupos marginados o tradicionalmente excluidos y es esencial la participación activa de grupos específicos (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, entre otros) para lograr un desarrollo sostenible con igualdad y con un enfoque de derechos. Los gobiernos locales, los parlamentarios y el sector académico son partes interesadas críticas en la implementación del ODS 16.
- Las instituciones nacionales de derechos humanos deben participar activamente en el seguimiento de la Agenda 2030; es esencial reflejar los estándares de derechos humanos en las políticas públicas relacionadas con el ODS 16 y a la Agenda 2030 en su conjunto.
- La violencia en sus diversas manifestaciones erosiona el tejido social de los países de América Latina y el Caribe y es un problema transversal para el desarrollo inclusivo; los elevados índices de violencia afectan directamente a los jóvenes. La violencia de género, el feminicidio y el femicidio, el acoso y la trata de personas constituyen una problemática regional que se ha transformado en un asunto que requiere atención urgente.
- El sector privado también puede hacer una importante contribución a los esfuerzos para la consolidación de la paz, la inclusión, el avance del estado de derecho y la eliminación de la corrupción para crear un entorno propicio para el desarrollo sostenible donde las empresas puedan prosperar.
- El voluntariado es un poderoso acelerador del ODS 16, especialmente para incluir a grupos poco representados y asegurar que nadie se quede atrás.

## Desafíos y oportunidades para la implementación, el seguimiento y el examen del ODS 16 y sus metas

### Desafíos

- Contar con el financiamiento y los recursos económicos, materiales y humanos para implementar el ODS 16.
- Involucrar a todos los sectores de la población, llegar a los más rezagados, tradicionalmente marginados o excluidos, y apoyar a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
- Existen dificultades para medir los progresos realizados en el ODS 16 porque no se dispone de indicadores o no son comparables entre los países.

- La discriminación y las desigualdades en todas sus formas y manifestaciones, así como todas las formas de violencia, como la violencia cultural, social, estructural e institucionalizada, y especialmente la violencia de género.
- El cierre del espacio democrático en la región y niveles muy bajos de confianza en el Estado y la democracia.
- La corrupción instaurada en todas las instancias y niveles en la región.
- Las brechas de género, la desigualdad en todas sus manifestaciones, la falta de oportunidades y el limitado acceso a la justicia.
- La criminalización de la protesta, de la libertad de expresión y participación, y de libertades fundamentales, la discriminación y explotación diversas, y las detenciones arbitrarias por parte de agentes de seguridad pública.
- En la región, los mecanismos de participación juvenil no son efectivos, lo que reduce las posibilidades de una participación activa en la toma de decisiones y no permite una verdadera representatividad en el sistema.

### Oportunidades

- 23 países de la región cuentan con una ley de acceso a la información pública.
- 17 países son miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, ya se han implementado 38 planes de acción y hay 10 en etapa de implementación, además de 1.060 compromisos de acción para el período 2011-2020.
- 14 instituciones nacionales de derechos humanos en América Latina y el Caribe cuentan con estatus A, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).
- Una pronta entrada en vigor e implementación del Acuerdo de Escazú favorece el cumplimiento de la Agenda 2030 y los acuerdos multilaterales ambientales.

### Lecciones aprendidas y buenas prácticas con respecto al ODS 16 y sus metas

- El proceso de negociación del Acuerdo de Escazú fue un proceso abierto, inclusivo y convocante, que generó alianzas entre los Gobiernos y el público, el sector académico y el sector privado, y que favorece la cooperación Sur-Sur y el multilateralismo para el desarrollo sostenible.
- En la Argentina, en el caso de contaminación del río Matanza (Riachuelo), la justicia ha ido abriendo camino hacia una mayor operatividad del derecho ambiental y a una participación activa de la comunidad, que contribuye al monitoreo y el cumplimiento de sentencias ambientales.
- En el Perú se ha avanzado hacia la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en proceso de reglamentación en el Ministerio del Ambiente con incorporación de recomendaciones de la sociedad civil, la actualización del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, que incorpora 10 compromisos para promover la justicia ambiental en el país (uno de ellos, es el observatorio de justicia ambiental donde se han incorporado más de 20 instituciones).
- Procesos internos para la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, con participación de los distintos poderes, la sociedad civil y otros actores interesados, en Antigua y Barbuda, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, Guyana, México, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y el Uruguay.
- La implementación de la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus) de la Comisión Económica para Europa (CEPE), constituye un referente y ofrece oportunidades de colaboración interregional.
- El Foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030 incluyó una serie de conferencias virtuales donde los jóvenes conocieron los ODS, con una etapa preparatoria que incluyó una consulta virtual y la realización de 50 mesas juveniles a nivel local, con cientos de jóvenes de 16 países de la región.



## Recomendaciones desde América Latina y el Caribe para alcanzar el ODS 16 y sus metas

- Se invita a los países de América Latina y el Caribe que todavía no lo hayan hecho a firmar y ratificar a la brevedad el Acuerdo de Escazú, con miras a su pronta entrada en vigor e implementación.
- Se invita al sistema de las Naciones Unidas, los organismos internacionales y subregionales, los bancos de desarrollo, los donantes y otros actores relevantes a contribuir al logro del ODS 16 y, particularmente, a apoyar la pronta entrada en vigor e implementación del Acuerdo de Escazú.
- Los países deben avanzar en la adopción e implementación de leyes y disposiciones que favorezcan el acceso a la información pública y la accesibilidad de la información, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad en cada contexto.
- Se deben fortalecer las instituciones y el estado de derecho a través de la reestructuración de los poderes públicos, fortaleciendo la autoridad de los mismos con funcionarios capacitados, que respeten la separación de poderes.
- Es necesario desarrollar mecanismos de gobierno abierto y establecer mecanismos de agilización de trámites y procedimientos administrativos.
- Debe darse seguimiento a la participación de los jóvenes, impulsar que sean ellos mismos quienes formulen sus canales de participación.
- Se alienta a adoptar un enfoque participativo, colaborativo e inclusivo, creando sinergias entre los gobiernos y la sociedad civil y otros actores interesados.
- Se necesitan campañas de educación, sensibilización y difusión de los ODS, que incentiven a la sociedad a aplicarlos, tomando la paz como eje transversal de la Agenda 2030.
- Maximizar el potencial del voluntariado y su contribución a la Agenda 2030 mediante un cambio de enfoque que permita generar datos y medir su impacto, al igual que su integración en estrategias para el desarrollo.
- Empoderar a las mujeres para cerrar las brechas de género, por ejemplo, a través de programas de capacitación, microcréditos, protección social, remuneración del trabajo doméstico y horarios flexibles del trabajo.
- Luchar contra el machismo en la región mediante talleres de cambio cultural, que involucren a mujeres y hombres, campañas de comunicación para el desarrollo y talleres con periodistas.
- A fin de implementar el objetivo de justicia social para todos, se podrían generar nuevos contratos entre el Estado y los ciudadanos que combatan las desigualdades en múltiples niveles, ya sean geográficos, políticos, de género, éticos, religiosos, sociales, económicos, culturales o medioambientales.

